

DIGNIDAD EXIGE DIGNIDAD EXIGE DIGNIDAD EXIGE DIGNIDAD EXIGE DIGNIDAD EXIGE DIGNIDAD EXIGE



“CAMBIAR ESTE ESCENARIO DE MUERTE”

EXIGE DIGNIDAD EN LAS FAVELAS DE BRASIL

VIVIR SIN VIOLENCIA ES UN
DERECHO HUMANO

**AMNISTÍA
INTERNACIONAL**





“Una semana de tiroteos significa una semana, o tal vez dos, sin trabajo. A veces también hay cortes de electricidad y de agua. Nunca sabes cuándo va a empezar el tiroteo [...] No sabes hacia dónde correr. El único sitio realmente seguro aquí es el cuarto de baño [...] ¿Por qué tenemos que aguantar esto?”

Maria Lúcia Almedia, Complexo do Alemão, abril de 2008

El 27 de junio de 2007, 1.350 policías lanzaron lo que denominaron una “megaoperación” contra las facciones de la droga insertadas en las favelas (asentamientos precarios) que forman el Complexo do Alemão, en el norte de Río de Janeiro. Las autoridades anunciaron a bombo y platillo el éxito de la operación, declarando que habían muerto 19 presuntos narcotraficantes y que la policía había confiscado 13 pistolas y varios kilos de drogas. La operación fue la culminación de una serie de incursiones que se efectuaron en los meses previos a la celebración de los Juegos Panamericanos de 2007.

Hoy las facciones de la droga siguen controlando las vidas de los más de 180.000 residentes del Complexo do Alemão. Innumerables mujeres y niños corren el riesgo de sufrir traumas psicológicos extremos como consecuencia de periodos continuados de disparos. Viviendas y negocios han quedado destruidos; escuelas y guarderías han sido clausuradas durante largo tiempo. Durante largo tiempo, las comunidades carecieron de acceso a los servicios de agua, electricidad y recogida de basuras. Los habitantes del Complexo do Alemão, una vez más abandonados por el Estado, sufrirán las cicatrices de la incursión durante años.

En miles de favelas de todo Brasil, comunidades enteras viven atrapadas en la pobreza y excluidas de toda una serie de servicios. Los años de abandono del Estado han creado un vacío que han llenado las bandas delictivas, que ahora controlan la vida cotidiana de muchas comunidades imponiendo toques de queda, multas y castigos y decidiendo quién tendrá trabajo, vivienda, atención médica o educación y quién no.

La aparición de las milicias —grupos parapoliciales integrados por policías fuera de

“Hemos llegado al punto en que tenemos que pedir ayuda. No aguantamos más perder amigos, familiares y niños por la violencia armada. Es urgente cambiar este escenario de muerte.”

Hércules Mendes, presidente de la asociación de vecinos de Caracol, Complexo de Penha, Río de Janeiro, marzo de 2007

servicio, guardias penitenciarios, ex soldados y bomberos— en algunas de las comunidades más pobres de Río de Janeiro ha intensificado unos niveles de inseguridad y violencia que ya eran insoportables. En las comunidades abandonadas por el Estado, las milicias se enfrentan a las bandas del narcotráfico para lograr el control. Una investigación parlamentaria realizada en 2008 sobre el papel de las milicias reveló una red de negocios de protección, irregularidades electorales y amplios vínculos entre policías corruptos y políticos estatales y municipales.

Las autoridades federales y estatales han reconocido la necesidad de reformar las prácticas de la seguridad pública. Sin embargo, pese a las abrumadoras pruebas de que la actuación policial violenta no es eficaz para ofrecer seguridad, sus promesas de reforma desaparecen rápidamente ante la más mínima petición de la opinión pública para que se endurezcan las medidas de seguridad. Algunos gobiernos estatales siguen apoyando una actuación policial cada vez más represiva y violenta que pone en peligro a los residentes y afianza aún más la violencia, la alienación y las privaciones. Las incursiones de policías

fuertemente armados en las comunidades son costosas en vidas humanas y contraproducentes. Cuando la policía se retira, las facciones de la droga son libres para reafirmar su control.

Muchas familias de víctimas de tiroteos, que ya luchaban para sobrevivir, caen en una pobreza aún mayor debido a la muerte o a las heridas del hijo o del padre de quien dependían. En entrevistas con Amnistía Internacional, mujeres cuyos familiares habían perdido la vida en operaciones policiales trataban por todos los medios de dejar claro que el familiar fallecido era un “trabajador” o un “estudiante”, no un delincuente. Estas mujeres ponen en entredicho la indiferencia y la discriminación de gran parte de la sociedad brasileña, que etiqueta a quienes viven en las favelas de delincuentes sólo por el lugar donde viven. Es este arraigado prejuicio el

La población de São Paulo se disparó en las décadas de 1960 y 1970, cuando el desarrollo industrial propició la llegada de inmigrantes de otras partes del país. La ausencia de planificación y de previsiones para estas comunidades hace que la ciudad siga afrontando una crisis de vivienda. Alrededor de la mitad de la población vive precariamente en favelas de la periferia, casas de vecindad o como ocupantes ilegales. Según el relator especial de la ONU sobre el fomento de la realización del derecho a una vivienda adecuada, unas 10.000 personas duermen en las calles de São Paulo cada noche.

En este contexto, la ocupación entre 2002 y 2007 del edificio Prestes Maia (que llevaba vacío más de una década) se convirtió en un punto de convergencia de las protestas de las familias sin techo y de las ONG que trataban de presionar a las autoridades para que tomaran medidas.

Portada: Una pareja con un bebé huye de su casa, mientras un agente de la policía militar recorre con cautela el callejón durante una importante operación policial en Rocinha, Río de Janeiro, 2005. Rocinha es una de las mayores favelas de Brasil.

Elas da Favela © Datne Capella



“Ahí abajo, en la parte rica de la ciudad, es diferente. Creen que la policía realmente tiene que invadir, realmente tiene que matar, realmente tiene que exterminar todo lo que ocurre aquí. No ven que esta es una comunidad con gente que trabaja y niños que estudian.”

Lúcia Cabral, Complexo do Alemão, abril de 2008

que permite que la policía cometa violaciones con impunidad y hace que sea tan difícil romper el círculo de violencia y privaciones.

Varios factores se conjugaron para asegurar la exclusión de quienes viven en las favelas.

Las condiciones de la vivienda en las favelas son quizá el indicador más evidente y condenatorio de hasta qué punto el Estado ha hecho dejación de sus responsabilidades respecto de estas comunidades. Las viviendas son precarias, inadecuadas e inseguras. Incluso cuando se han construido viviendas nuevas, el hecho de que en algunos casos no se hayan garantizado unos niveles adecuados de vivienda y de servicios muestra lo poco que se ha tenido en cuenta las vidas de quienes iban a residir en ellas.

Los trabajadores de la salud suelen ser reticentes a entrar en estas comunidades por miedo o por prejuicios, lo que limita el acceso de quienes residen en ellas a servicios esenciales. Una de las consecuencias de esto son los niveles sumamente bajos de atención prenatal y maternal. Las mujeres de comunidades socialmente excluidas, sobre todo las de ascendencia afrobrasileña, corren mayor peligro de morir al dar a luz.

El acceso a la educación es fundamental para ayudar a las personas a salir de la pobreza. Sin embargo, las exhaustivas investigaciones de la UNESCO han mostrado que las escuelas de Brasil son lugares sumamente violentos. Y fuera, en las calles, los peligros que acechan a los niños de las favelas son sobrecogedores. Según informes, las facciones de la droga usan

a niños de incluso cinco años como *aviãozinhos* (mensajeros) y así empiezan a incorporarlos a la cultura de las bandas. En estas comunidades las guarderías son prácticamente inexistentes.

La respuesta del Estado a las necesidades de las personas que residen en las favelas revela una discriminación arraigada. Los servicios y medidas de seguridad disponibles han sido impuestos sin consultar a los afectados, lo que tal vez explique por qué son tan ineficaces. Algunos de los pocos proyectos de seguridad de las comunidades que se han establecido han logrado mejorar en cierta medida la seguridad y contribuir así a poner fin al ciclo de privación y violencia. No obstante, estas iniciativas siguen siendo la excepción. La mayor parte de la política de seguridad continúa siendo violenta y de enfrentamiento. No se



Ivaneti de Araujo, coordinadora del MSTC, se dirige a la multitud de personas que ocupan el edificio Prestes Maia, 2007.

Pese a la amenaza constante de desalojo, las familias de Prestes Maia crearon una vibrante comunidad. Compartiendo sus limitados recursos, gestionaban una guardería, una biblioteca, un cine y actos artísticos. Bajo los auspicios del Movimiento de los Sin Techo del Centro (Movimento Sem Teto do Centro, MSTC), los nuevos residentes retiraron unos 300 camiones de basura y limpiaron partes del edificio donde las aguas residuales llegaban a un metro de altura.

A pesar de las amenazas y, en ocasiones, de obstáculos aparentemente insuperables, la ocupación de Prestes Maia constituyó un éxito extraordinario. Tras una amplia campaña nacional e internacional, se prometió a todos los residentes nuevas viviendas en la ciudad.

“No tiene ningún sentido invertir sólo en seguridad pública y dismantelar las estructuras si no se pone en su lugar una escuela o un centro de salud.”

Relator Nacional sobre Educación, octubre de 2007

© Sadraque Santos/Imagens do Povo



tienen en cuenta las necesidades de los millones de personas que viven en comunidades desventajadas. Quienes están en el poder simplemente no oyen sus temores y aspiraciones.

Algunas organizaciones dinámicas que promueven los derechos de las personas sin techo y de quienes viven en asentamientos informales siguen prestando su voz a estas necesidades y demandas tanto tiempo ignoradas. Ante el grave abandono y la omnipresente violencia, exigen servicios de agua, alcantarillado, atención médica, guarderías y educación, viviendas adecuadas y seguras, y una actuación policial que contribuya a erradicar la violencia y la delincuencia en lugar de consolidarla aún más.

Las pruebas son abrumadoras. Ninguna estrategia basada en la criminalización de comunidades enteras puede ofrecer una

Residentes del Complejo do Alemão se reúnen, en octubre de 2006, para protestar contra la violencia policial y las violaciones de derechos humanos durante sus agresivas operaciones. La pancarta dice: “La policía debe tratar a la población del Complejo do Alemão con respeto e igualdad porque los residentes de la favela también pagan impuestos”.

seguridad sostenible. El mantenimiento de una relación activa con las comunidades para abordar la privación social, la exclusión y la violencia delictiva y policial puede servir para proteger los derechos humanos, ofrecer justicia y salvaguardar la dignidad humana. Amnistía Internacional viene pidiendo constantemente a las autoridades federales y estatales de Brasil que trabajen con las comunidades locales y no contra ellas para hacer frente a los problemas de la violencia, la privación y la exclusión en las favelas.

ACCIÓN

Amnistía Internacional pide a los gobiernos que:

Garanticen que las personas que viven en asentamientos precarios tienen igualdad de acceso a una vivienda adecuada y a servicios públicos

Los gobiernos deben combatir la discriminación directa e indirecta de las personas que viven en asentamientos precarios. Asimismo, deben revisar, modificar o anular la legislación y las disposiciones que tienen un efecto discriminatorio. Además, las autoridades deben garantizar que todas las comunidades tienen igualdad de acceso al agua, servicios sanitarios, atención médica y educación y que se establecen objetivos claros para proporcionar estos servicios. Deben establecerse procedimientos y políticas que garanticen que las personas que viven en asentamientos precarios tienen acceso a la información y a los procesos pertinentes para que puedan influir en las decisiones que afectan a sus vidas, directa o indirectamente.

Introduzcan una actuación policial basada en los derechos humanos y garanticen la participación activa de las personas que viven en asentamientos precarios en el desarrollo y la puesta en práctica de planes de seguridad

Los gobiernos deben introducir mecanismos de investigación dotados de credibilidad y efectivos para abordar las quejas sobre abusos policiales contra comunidades desventajadas y excluidas. Asimismo, deben introducir normas legales y de procedimiento para garantizar que la actuación policial se basa en las normas internacionales de derechos humanos, y concretamente en el Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y en los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley. Los gobiernos deben garantizar también la eliminación de las barreras que impiden que las personas que viven en asentamientos precarios participen activamente en la creación de planes de seguridad pública integrales para la protección de los derechos humanos.

WWW.DEMANDDIGNITY.AMNESTY.ORG

**VIVIR SIN VIOLENCIA ES
UN DERECHO HUMANO**

**AMNISTÍA
INTERNACIONAL**



Amnistía Internacional es un movimiento global integrado por 2,2 millones de personas de más de 150 países y territorios que trabajan para poner fin a abusos graves de los derechos humanos.

La visión de Amnistía Internacional es la de un mundo en el que todas las personas disfrutan de todos los derechos humanos proclamados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en otras normas internacionales de derechos humanos.

Amnistía Internacional es independiente de todo gobierno, ideología política, interés económico y credo religioso. La financiación del movimiento se sustenta, en gran medida, en la generosidad de aquellas personas que contribuyen en todo el mundo con sus cuotas de afiliación o sus donaciones.

Mayo de 2009
Índice: AMR 19/003/2009

Amnistía Internacional
Secretariado Internacional
Peter Benenson House
1 Easton Street
London WC1X 0DW
Reino Unido

www.amnesty.org